

del Gobernador del Estado, explicando que la consignación de Cortazar fué como desertor de su cuerpo. Vistas las pruebas rendidas: los pedimentos del Promotor: el alegato de la parte del quejoso y la sentencia del juez de Distrito, en la que concede el amparo solicitado, porque de autos consta que el solicitante no había sido soldado y por tanto desertor; y que es hijo único de viuda á quien sostiene.

En virtud de los fundamentos acabados de exponer que demuestran que á José María Cortazar, soldado contra su voluntad en el batallón núm. 18 de infantería, se ha violado, consignándole al servicio de las armas, la garantía otorgada por el art. 59 de la Constitución Federal, no suspensa en su caso para los que como él han tenido la excepción de ser hijo único y sostén de una madre viuda, según la ley de 17 de Mayo próximo pasado. Con apoyo de la de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Es de confirmarse y se confirma la sentencia referida del juez de Distrito de Puebla, pronunciada en esa ciudad á 21 de Octubre último, en la que se declara que la Justicia de la Unión ampara y protege á José María Cortazar, por haber sido consignado al servicio de las armas por el C. Gete político, con cuyo hecho se ha violado en su perjuicio la garantía que otorga el art. 59 de la Constitución, estando exceptuado para ello conforme á lo determinado por el art. 29, fracción 8ª de la ley de 17 de Mayo del presente año.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos correspondientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y fir-

maron.—*Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Arzu.—Simon Guzman.—Luis Velazquez.—José García Ramirez.—Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 15 de 1872.—*Lic. Agustín Ferralla*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por el C. Lic. Juventino Guerra, contra los actos y providencias dictadas por el C. Lic. Luis G. Pastor, que funge como ministro del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, en el juicio verbal que Guerra siguió contra D. Gorgonio Niño, sobre cobro de honorarios.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Lic. Juventino Guerra, ha pedido la intervención de la Justicia federal por vía de amparo, en una cuestión pendiente en los tribunales del Estado, y que por su carácter es meramente civil. Bastaba la lectura del art. 89 de la ley de 20 de Enero de 1869, para no admitir el recurso interpuesto, que lastima derechos de tercero á la par que hace erogar gastos al erario federal, quien tiene que satisfacer los honorarios del C. juez suplente que conoce por recusación del propietario, en este asunto.

Dos son los capítulos en que funda el quejoso la procedencia del amparo solicitado; á saber: los procedimientos atentatorios de una de las salas del Tribunal de Justicia de Querétaro, y la absoluta falta de jurisdicción de este cuerpo, por haber sido electo con infracción de las leyes relativas.

El C. Gorgonio Niño, patrocinado por el C. Lic. Juventino Guerra, ha se-

guido un dilatado litigio con el O. Juan N. Rubio, que reclamaba de aquel la devolución de la hacienda de Vegil, y el pago de las rentas de cierto número de años que ha tenido Niño en arrendamiento dicha finca de labor. Habiendo vuelto Rubio á hacerse de su hacienda, se siguió un juicio arbitral sobre pago de rentas y devolución de las cabezas de *ganado mayor* que Niño introdujo durante el arriendo en la finca. En este estado de cosas, pronunciado el laudo respectivo, el C. Lic. Guerra demandó á Niño por honorarios. Confesada la deuda se procedió al embargo del ganado detenido por Rubio, extrayéndolo de su poder en parte, pagándole con él al nuevo acreedor, bajo de fianza que sería cancelada si el Tribunal Superior aprobaba lo hecho por el juez de 1.^a instancia.

Quejóse Rubio de despojo ante el predicho Tribunal, que mandó: *se restituyera á D. Juan N. Rubio, en la posesión de las reses secuestradas; conservándolas á disposicion del juez árbitro que conoce de la cuestion pendiente entre Rubio y D. Gorgonio Niño, y que tanto á este como al C. Lic. Guerra, se les dejasen á salvo los derechos que puedan tener á las mismas reses, para que los deduzcan ante quien corresponda.*

Parecerá ajeno de un juicio de amparo el ocuparse de un punto de derecho comun, cuando en él se dilucidan cuestiones de derecho constitucional; pero el giro que se le ha dado á este negocio así lo requiere, y fuerza es proseguir el recurso una vez que se ha admitido, suspendiendo desde luego el acto reclamado.

La accion de Rubio para tener en su poder el ganado vacuno de Niño, para la seguridad del pago del arrendamiento, es indudable; ya que sea la que los romanos distinguieron con el nombre de Serviana, por haberla introducido el Pretor Servio, ya que únicamente le

competa el interdicto Salviano. "*Adipiscendæ igitur possessionis duo sunt interdicta. Primum dicitur quorum Bonorum. Alterum vocatur Interdictum Salvianum*: nomen adeó frecuentemente in foro decantatum, et ita dictum à Salvio Juliano jurisconsulto, qui jussu Hadriani Imperatoris, illud composuit." "Pro ejus intelligentia figuro casum. Locavi Titio domum meam annua pensioni scutorum 60, et Titius importavit res suas in domum conductam quæ ex alibi dictis sunt tacite hypothecatae pro solutioni pensionis). Vergit jam ad exitum quinquenium, et aliquot annorum pensionis non solutas mihi debet conductor, imo audax debitor clani paulatim res in domum importatas, vel alienare incipit, vel remove; quaritur; quomodo mihi consultum sit? Respondeo, quod ex dictis [*sub titulo de actionibus*], possit talis locator intentare actionem Servianam, contra quemcumque, apud quem dictæ res ablatae manent, sed quia experimentum hujus actionis requirit nimis altam indaginem, cum probandum sit in judicio petitorio, conductorem fuisse dominum illarum rerum, res enim aliena neque expresse neque tacite obligari potest, et cum dominii probatio nimis ardua sit, et difficilis: ideó ut compendiarie via res hujus modi locator consequi possit, ipse Pretor consuluit hoc interdicto, in quo, probato tantum quod res illæ fuerint à conductore in prædium conductum importatae, obsque alia probationi an ille fuerint inferentis, nec ne, eas facile locator abtinebit: in quo convenit hoc interdictum, cum actione Serviana, *datur enim id contra conductorem ipsum; sed si ipse res invecata alienaverit, datur contra quemlibet tertium possessorem, in quem colonus res alienaverit, dummodo sint penes ipsum.*" (Inst. juris. civil. autore Francisco Gasparro. Romano. Pars. 3, tit. 11, §§ 34 et 35.)

Estos principios del derecho de Jus-

tiniano han pasado al que entre nosotros estaba vigente, cuando contrataban Niño y Rubio, y empezaban á litigar. Por las leyes Alfonsinas y las de la Recopilacion, el arrendador tiene obligadas á su favor, para el pago del precio ó renta y de los deterioros, todas las cosas que encontrare en la finca arrendada y fueren propias del arrendatario, con tal que se hayan puesto en la heredad con su conocimiento; y puede retenerlas como prendas hasta reintegrarse. Tiene ademas preferencia en los frutos de las tierras sobre cualquiera otro acreedor (LL. 5, tít. 8, part. 5ª, y 9, tít. 17, libro 3 del Fuero Real, y 6ª, tít. 11, lib. 10, N. R.).

Por la misma índole de estas cuestiones, se comprende cuán distantes están de ser objeto de la jurisdiccion federal. Un juez de 1ª instancia privó á Rubio del derecho enunciado de retencion; el Tribunal, sea en grado, sea por la vía de un interdicto de despojo, restituye las cosas á su pristino estado. ¿Hay ó puede haber aquí garantías individuales violadas? No pueden considerarse por lo mismo, atentatorios los procedimientos del Tribunal en ese asunto. Considérase el quejoso despojado autoritativamente de su propiedad; mas por la relacion de los hechos y del derecho que les es aplicable, se viene en conocimiento de que el ganado vacuno de Niño no ha pertenecido al C. Lic. Guerra, quien solo tiene derechos de acreedor contra el propietario: derechos encontrados con los de Rubio, y cuya decision está pendiente. El pago hecho al C. Guerra, fué con calidad de provisional y bajo fianza de acreedor de mejor derecho, y á condicion de que los procedimientos de 1ª instancia fuesen aprobados en la 2ª [Informe de fojas 13]. No hay en el caso ni puede haber violacion de un derecho de propiedad, cuando esta no se habia adquirido.

La forma en que ha sido reintegrado

Rubio en su derecho de retencion, es la forma de los interdictos, en que solo se trata de una posesion momentánea, y no de aquella verdadera y real posesion que semejante ó próxima á la propiedad, es la que se necesita para la usucapion. Si se le dió ó no audiencia al quejoso para determinar sobre ese incidente, no es del caso; pues como enseña Eseriche: "en ninguno de estos interdictos es necesaria la audiencia de la parte contraria; y así es, que todos ellos se admiten y determinan sin llamar ni citar á nadie, y sin que nadie pueda impedirlo contra la voluntad del que usa de este medio, ni aun provocando el juicio plenario de posesion ó propiedad, el cual no puede tener lugar sino despues de la decision del interdicto (Eseriche. Diccionario. Art. interdicto. §. 7).

No quiere decir esto que durante el interdicto se deniega la audiencia al que quiere hacerse oír; sobre cuyo punto no hay cuestion en el procedimiento que nos ocupa.

De aquí es que, puede decirse en general, que por una sentencia que versa sobre la posesion interinaria de un interdicto, no puede atacarse la propiedad, ni aun siquiera la posesion plenaria que es la verdadera y real posesion que nos pone en la vía de la usucapion; por lo que en el caso presente, el fallo del Tribunal no ha podido violar la garantía del art. 27 de la Constitucion.

La absoluta falta de jurisdiccion que se atribuye al Tribunal de Querétaro por vicio electoral, no es cuestion que pueda resolverse por los jueces federales, cuando lo fué ya por la legislatura del Estado, en la forma establecida por la Constitucion del Estado (artículos 39, 40, 41 y 117 de la Constitucion Federal y fracciones 7 y 9 del art. 63 de la constitucion de Querétaro).

Si la legislatura abusó de sus facultades, no habiendo infringido al hacer

la calificación respectiva ninguna de las garantías individuales, no existe motivo para fundar que la jurisdicción federal pueda hacer declaración sobre este punto.

En vista de lo cual el Promotor pide: se sirva vd. resolver que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Lic. Juventino Guerra, contra los procedimientos del Tribunal Superior de Querétaro, restituyendo en la posesión interina de algunos bienes semovientes de D. Gorgonio Niño, al C. Juan N. Rubio; y sobre los que deduce derechos el quejoso.

Querétaro, Setiembre 3 de 1872.—
Luis Castañeda.

SENTENCIA del ciudadano juez de Distrito.

Querétaro, Octubre 2 de 1872.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Lic. Juventino Guerra, contra los actos y providencias dictadas por el C. Lic. Luis G. Pastor, que funge como ministro del superior Tribunal de Justicia de este Estado, en un juicio verbal que el mismo Guerra siguió contra el C. Gorgonio Niño, por honorarios que este le debía como su abogado patrono; el escrito del quejoso; el informe dado por el juez 1º de letras como autoridad ejecutora de los actos reclamados; el pedimento fiscal formulado en vista de ese informe; el auto de 23 de Agosto próximo pasado, en que se mandaron suspender los actos reclamados; el segundo informe con justificación que rindió el mismo juez y se ve á fojas 13; el pedimento fiscal consiguiente á ese mismo informe que obra desde la foja 15 á la 21 de esos autos; las pruebas rendidas por el quejoso; su alegato de buena prueba que corre desde la foja 34 á la 38; la citación para sentencia y todo lo demás que ver debía.

1º Considerando: que el C. Lic. Juventino Guerra, ha interpuesto amparo, del auto de 19 de Agosto del corriente año, dado por el C. Luis G. Pastor, que funge de ministro del Superior Tribunal de Justicia del Estado, asegurando, que se han vulnerado en su persona los derechos del hombre, reconocidos en los artículos 16 y 27 de la Constitución de la República, y fundándose para interponer su recurso ante este Juzgado, en el art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

2º Considerando: que dichos artículos, el 1º se refiere á que la molestia causada á los ciudadanos en sus personas, familias, posesiones etc., sea hecha por juez competente, y el 2º, á que la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por utilidad pública, y previa indemnización, y en ninguno de los dos casos existen esos requisitos; pues si se atiende á lo primero, al ministro Pastor le falta la competencia que exige la ley, pues ni aun tiene carácter de juez, y en cuanto á lo segundo, y aun suponiéndole competencia, tampoco se han llenado los requisitos de consentimiento, utilidad pública ó indemnización.

3º Considerando: que la incompetencia á que alude la parte quejosa, no es otra sino la falta absoluta de jurisdicción, por no haber recibido el Sr. Pastor su nombramiento de ministro del voto del pueblo, como lo manda expresamente el art. 96 de la Constitución del Estado, y el 49 del Código de la República.

4º Considerando: que conforme á las pruebas de la parte actora, queda justificado plenamente, que el C. Pastor no es ministro del Superior Tribunal de Justicia, pues aunque consta de autos que el congreso del Estado le dió el nombramiento, esto fué quitándole al pueblo sus derechos, pues él era á quien incumbía hacer la elección, sin que so-

bre esto, queda, caber duda, atentas las declaraciones uniformes de los cuatro testigos presentados, y las certificaciones de los escribanos; de fojas 25 y 26.

5º Considerando: que para que fuera legal el nombramiento del Sr. Pastor, es decir, para que fuera realmente magistrado, era indispensable que los seis Distritos de que se compone el Estado lo hubieran electo; lo que no sucedió sino solo en tres, por cuyo motivo el Congreso le dió el empleo de interino; según consta del decreto núm. 3 de fojas 27 vuelta; mientras se hacían las elecciones en Cadereyta, Toluca y Jalisco que no habia postulado; que aun suponiendo tal procedimiento, este también sería ilegal; porque la fracción 3ª del art. 71 de la ley electoral vigente, previene que siempre que se nulifique la elección, todos los seis Distritos repitan su postulación; lo cual se desechó por el Congreso quien *hospite insalutario* y abrogándose los derechos del pueblo, procedió al nombramiento de ministros propietarios, entre los que fueron el Sr. Pastor, como consta del decreto núm. 35, del cual han certificado los escribanos; corroborándose lo dicho con las declaraciones de los testigos, sobre que no se fijó por el ejecutivo día para las elecciones, como lo previene el decreto núm. 12, y no habiéndose fijado día, malamente pudo haber elecciones.

6º Considerando: que aun suponiendo que el decreto sobre nombramiento de Ministros, en su origen hubiera tenido legalidad por haber nacido del pueblo; esa legalidad claudicaba por no tener dicho decreto sancion legítima, atenta la falta del ejecutivo en el Estado, según consta plenamente probado en los autos.

7º Considerando: que el punto capital de la cuestión de que se trata en estos autos, como tengo indicado, es la inobservancia del art. 109 de la Constitución de 1857, y que los Juzgados

de la federación son los competentes para conocer de todas las controversias sobre cumplimiento y aplicación de leyes federales, según el art. 97 de ella misma. A que se agrega, que los Juzgados de Distrito tienen establecida su competencia por el art. 101, para conocer de los juicios sobre violación de garantías; y las infracciones del citado art. 109 traen consigo indudablemente tal violación; lo uno, porque el art. 1º de la Carta fundamental, declara que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, y lo otro, porque infringir el tantas veces repetido art. 109 es destruir en los Estados la forma *tutelar de gobierno republicano*, lo cual es herir en su raíz todas las garantías del individuo, ó sea todos los derechos del hombre; con la circunstancia especial del caso, que faltando en las autoridades la elección del pueblo, carecen de título legítimo y no pueden figurar en el número de las competentes, lo que hace renacer á los ciudadanos, llegado el caso, el derecho de quejarse de la garantía particular establecida por el art. 16 que previene, "que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles etc., sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente."

8º Considerando: que el auto de 19 de Agosto en que mandó el Ministro Pastor que se quitaran al Lic. Juvenio Guerra las reses que el Juzgado de letras le habia adjudicado en pago [fojas 7 vuelta], no debe considerarse verdaderamente como judicial, en atención á que por ningún capítulo esa disposición quedaba sujeta á revisión, porque la ley orgánica del Estado previene, que el fallo en los juicios verbales no admite otros recursos que el de responsabilidad contra los jueces ó sus asesores [art. 83 fojas 64] por cuya razón dicho auto debe considerarse como orden de una autoridad que despojaba á los intereses de Guerra.

9º Considerando: que ni como despojo pudo el Sr. Pastor conocer del repetido fallo del juez de letras, 1º, porque consta de autos [fojas 13], que el Sr. Rubio no era dueño de las reses, sino que estaban afectas por los pastos, y bien se sabe que el acreedor pignoraticio no tiene posesion en la prenda; y 2º, porque el juicio de despojo conforme á la ley orgánica, corresponde á los jueces del partido, así lo dice el art. 94 [fojas 65 vuelta]: "Qualquiera que sea despojado ó perturbado en la posesion de alguna cosa profana etc., ocurrirá al juez de letras del partido;" que por estas razones y por las que dió el juez de letras en su informe [fojas 78], el repetido auto no tuvo otro carácter que el de orden atentatoria; como arriba se dijo, para despojar al Lic. Guerra de las reses que el Juzgado de letras le había dado en pago. Por estos considerandos y con fundamento del art. 1º, fracción 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869, de los 16 y 109 de la Constitucion Federal de la República y por las doctrinas recibidas en la práctica de los autores Toqueville, Story, Comentarios á la Constitucion americana y otros, fallo:

Que la Justicia Federal ampare y proteja al C. Lic. Juventino Guerra, contra el auto de 19 de Agosto del corriente añodado por el C. Luis G. Pastor, que funge de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de este Estado, en el juicio seguido por aquel contra D. Gorgonio Niño.

Repóngase por la parte de Guerra con el papel sellado correspondiente, el que se usó del común. Hágase saber, sáquense copias de esta sentenencia para que se publique en el "Diario Oficial" y "Semanario Judicial". Así definitivamente juzgando lo mandó y firmó el Sr. juez 1º suplente de Distrito de este Estado: doy fé.—*Mariano Pimentel*.—*Francisco Ruiz*, secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 12 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido en 20 de Agosto último ante el juez de Distrito de Querétaro, por el C. Lic. Juventino Guerra, contra los actos y providencias dictadas por el C. Lic. Luis G. Pastor, que funge como Ministro del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, en el juicio verbal que Guerra siguió contra el C. Gorgonio Niño, sobre cobro de honorarios: Vistos los pedimentos del Fiscal y del quejoso; las pruebas rendidas; los alegatos, y cuanto mas consta de autos y ver convino.

Considerando: en cuanto á la acumulacion que hace el quejoso de las garantías que cree violadas en su persona: Que una vez alegada la garantía que otorga el art. 16 que supone el acto reclamado, con una forma y carácter especiales, ya no puede alegarse la del art. 27 que supone al mismo acto de otra forma y con un carácter diverso.

Considerando: en cuanto á la incompetencia objetada contra el Magistrado Luis G. Pastor: Que conforme á los principios de la jurisprudencia universal y á nuestras instituciones, siendo la *jurisdiccion* el poder natural ó conferido para conocer en asuntos de derecho, la *competencia* no es mas que la medida de ese poder; y la *incompetencia*, como su opuesto, se refiere necesariamente á la que está fuera de esa medida. Que por lo mismo, toda incompetencia consiste esencial y originariamente, en una falta de poder, que si, como recurso del orden judicial, solo puede objetarse con relacion á un caso determinado y concreto, en su demostracion hay que seguir las mas veces, el método deductivo y silogístico, probando que hay una falta mas ó menos general de poder, en la que se comprende la del caso especial. Que en efecto, toda falta de poder en las au-

toridades, es siempre *mas ó menos general, absoluta ó nula* como puede observarse respectivamente:

1º: En las autoridades legitimamente establecidas para conocer *de ciertos y determinados asuntos*, cuya *competencia* solo puede decirse *parcial y relativa*, y cuya *incompetencia* por lo mismo *mas ó menos general*.

2º: En las autoridades *puramente de hecho*, que no tienen poder alguno natural ni conferido, cuya *competencia es nula*, y su *incompetencia* absoluta ó omnimoda; pero que reputándose ó pretendiendo ser legítimos, y contando como cuentan, para llevar al cabo sus resoluciones con todos los elementos y recursos de la autoridad legítima, hay que admitir contra ellas todos los recursos que, en su caso, procederían contra esta.

3º: En la totalidad de la Nación, que naturalmente reúne en sí todos los poderes, cuya *competencia es absoluta*, y contra quien no hay *incompetencia* alguna que objetar, ni ante quien objetarla. Que la falta de poder ó incompetencia objetada contra el magistrado Luis G. Pastor, pertenece á la segunda clase de las enumeradas, y como cualquiera otra debe considerarse comprendida en el art. 16 de la Constitución, puesto que esta no hace distinción ni excepción alguna. Que admitir tal distinción y excepción en favor de las autoridades de hecho, sería hacer á estas de mejor condición que las autoridades legítimas; y admitirla en favor de la soberanía de los Estados que erróneamente se cree atacada, sería sacrificar los derechos del hombre que son el fin, á la institución que es el medio [Art. 1º de la Constitución]. Que para mejor garantizar los derechos del hombre, la independencia misma y la soberanía de los Estados se encuentra restringida por el art. 109 de la Constitución, que les impone la forma de Gobierno representativo popular; de manera que se encontraría infringido además

este precepto constitucional, si la incompetencia que se objeta fuera por su origen, contraria á esta forma de Gobierno. Que para no dejar violada una garantía individual, ni infringido un precepto constitucional, se hace indispensable entrar en el examen de si el magistrado Luis G. Pastor del Tribunal Superior de Querétaro, está bien nombrado bajo el punto de vista de la Constitución Federal. Que una vez impuesta á los Estados la forma de Gobierno representativo popular, y consistiendo esta esencialmente en que las autoridades de cada Estado sean nombradas como se previene en su respectiva Constitución, que nunca puede ser contraria á la federal [art. 41 de la Constitución]; es consiguiente, que los magistrados del Tribunal Superior de Querétaro deben ser electos popularmente, ó de lo contrario serán incompetentes.

Considerando: en cuanto si ha habido ó no elecciones en Querétaro para el nombramiento de magistrados: Que ni la parte Fiscal, ni la autoridad responsable por medio de su informe justificado, han presentado la prueba directa de que hubiera habido tales elecciones, buenas ó malas. Que el quejoso ha probado que no las hubo: 1º Por la deposición de seis testigos contestes y mayores de toda excepción. 2º Porque en la serie completa de decretos expedidos por la Legislatura, no se encuentra el de convocatoria y que fijara los días en que deberían verificarse las elecciones en los seis Distritos del Estado.

Por las razones y fundamentos expuestos, con apoyo en los artículos 101 y 102 de la Constitución y en la ley de 20 de Enero de 1869, se confirma la sentencia pronunciada por el juez de Distrito de Querétaro, en 2 de Octubre del presente año, cuya parte resolutive dice: "Que la Justicia Federal ampara y protege al C. Lic. Juvenio Guerra, contra el auto de 19 de Agosto del cor-

iente año, dado por el C. Luis G. Pastor, que funge de Magistrado del Tribunal de Justicia de este Estado, en el juicio seguido por aquel contra D. Gorgonio Niño. Repóngase por la parte de Guerra, con el papel sellado correspondiente, el que se usó del comun."

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese a su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—

Pedro Ogazón.—Juan J. de la Garza.—José M. Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramírez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Ansa.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre 11 de 1872.—*Lic. Agustín Peraltas, oficial mayor.*

AMPARO de garantías promovido por D. Juan G. García, D. Santiago Ayala y D. Lucio Rangel, ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, contra el C. Lic. Florentino Barrera, que como juez de letras de los distritos de Toluca y Cadereyta, dispuso la aprehension de los quejosos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor Fiscal dice: que D. Juan Gutiérrez García, D. Santiago Ayala y D. Lucio Rangel, acusados de homicidio ante el C. juez de letras de los Distritos de Toluca y Cadereyta, han interpues-

de los quejosos. Fundan estos su pretension, en que el acto por el cual se mandó privarlos de su libertad viola directamente el art. 16 de la Constitucion Federal, é indirectamente los artículos 41, 109 y 106 del mismo Código.

El 16 previene, que nadie pueda ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso presente, hay fundamento para el procedimiento seguido; y es autoridad competente para conocer de un delito el juez del lugar donde se perpetró. Al establecer el art. 18 de la Constitucion que solo haya lugar á prision por delito que inherezca pena corporal, confirma con esta excepcion la regla en contrario. Y como el delito de homicidio de que son acusados los quejosos tenga señalada esa pena, como se deduce del art. 23 de la misma Constitucion, y es de verse en todo el art. 89 de la partida 7ª y en los capítulos 5º, 6º y 7º del título 2º libro 3º del Código penal: es claro, que por este motivo no se ha infringido directamente el art. 16 precitado. En cuanto á la competencia del juez, tambien es innegable. Llámase competencia en materia criminal, el derecho que tiene un juez para conocer de un delito. Debe conocer de un delito el juez del lugar donde el reo lo cometió, ó donde está domiciliado, ó donde tuviese la mayor parte de sus bienes si en este fuere hallado, ó donde fuere aprehendido si no tuviese domicilio fijo. Habiendo contienda entre estos jueces, y mercedando el delito pena corporal, debe ser remitido el reo al del territorio en que delinquiró, á no ser que la persona que recibió el daño escogiese al del lugar del comi-

to el recurso de amparo contra el auto de ese funcionario que ha decretado su prision, dirigiendo el correspondiente exhorto al Juzgado 6º del ramo criminal de la ciudad de México, residencia actual

Quo. parti ajena pias tar p